

LO QUE HACE LA MANO DERECHA, QUE LO DESMIENTA LA MANO IZQUIERDA: CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

José Hernández Ramírez | *iosep12@yahoo.com.mx*

Escribir sobre la crisis económica que atraviesa nuestro país se ha vuelto ya un lugar común, desde al menos la década de los años ochenta, del siglo pasado. Existen, sin embargo, formas de asumir el problema de la crisis porque no es la misma en un estado benefactor que en un mundo neoliberal. En el primero, la noción de crisis corresponde al orden de la cuenta pública, en el segundo, al impacto que los mercados internacionales ejercen sobre la órbita del interés público. A final de cuentas, la crisis sigue tendiendo su eje más importante en los procesos de trabajo y de exclusión social.

Palabras clave: crisis, neoliberalismo, exclusión social, poder.

Writing about the economic crisis that our country is going through has become commonplace, since at least the 1980s. However, there are ways of approaching the problem of the crisis, because it is not the same in a welfare state as in a neoliberal world. In the former, the notion of crisis corresponds to the order of public accounts, in the latter, to the impact that international markets have on the orbit of public interest. Ultimately, the crisis continues to have its most important axis in the processes of work and social exclusion.

Keywords: crisis, neoliberalism, social exclusion, power.

Introducción

Se dice que la economía y la política son dos ámbitos sociales que convergen en lo estadístico pero divergen en los intereses. La discrepancia adquiere sentido cuando, por lo menos desde 1994 —último año del régimen de Carlos Salinas de Gortari— los indicadores económicos se deslizaron siempre en balanzas

negativas mientras que, por otro, lado, el discurso político se expresa siempre con autoelogios publiadministrativos. Dos botones son suficientes: primero, el otrora Secretario de Hacienda, Agustín Carsten, quien en medio de la recesión mundial del 2008, se expresó metafóricamente diciendo que el país sólo sufriría un «catarrito» porque México conta-



Doctor en Economía y profesor universitario. Sus líneas de reflexión están ligadas a los problemas de la historia, las estructuras económicas y las relaciones de poder.

ba con “una buena disciplina fiscal, una buena conducción de la política monetaria, tipo de cambio flexible, además de que la inflación en México fue más baja que en Estados Unidos” (Universal, 2008). El segundo botón es aún más elocuente. Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto declaró ante los medios de comunicación que, frente al escenario que ofrece la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, “en México no hay crisis, solo una gran incertidumbre” (Proceso, 2017).

La divergencia entre los indicadores económicos y el optimismo político en torno al desarrollo económico parecen ser dos campos diferentes en el estudio de la realidad social y suelen ser analizados de manera separada. En el presente documento, se parte de la tesis de que dicha discrepancia es sólo un indicador de la profunda crisis económica, política y social que vive nuestro país. La tesis parece ser muy sencilla: no hay indicador económico que se comporte de manera negativa que no venga acompañado de una profunda transformación del discurso político y de sus acciones públicas.

Una breve mirada a la crisis

El lingüista Uwe Pörksen habló de la existencia de un tipo de vocablos especiales que denominó como «vocablos-amiba». De acuerdo con Illich (1984), ese tipo de vocablos pertenecen a aquellos cuya plasticidad de significado ha sufrido diversas transformaciones semánticas de tal modo que pueden contener, en sí mismas, las más disímiles interpretaciones. “Lo singular de los vocablos-amiba es la forma en que se integran al lenguaje común” (p.17). Illich ofrece la idea de que las palabras sufren un desbordamiento

semántico y más cuando éstas no son delimitadas socialmente porque, pese a la fuerza significativa que tengan, sus significados siempre quedarán difusos. El término crisis corresponde a este tipo de vocablos especiales cuya plasticidad significativa es lo que ha permitido asociarla, como lo hizo el presidente de México, con términos como incertidumbre, retos y oportunidades.

El término crisis, sin embargo, tiene otra historia y significados muy precisos en el ámbito de la economía. Para algunos, “una crisis económica es el momento en que la economía de una nación o región pasa de una fase de crecimiento a otra de recesión (o depresión)” Otras escuelas, sobre todo las que provienen del enfoque de la economía política, han planteado que el término crisis está asociado “a la ruptura de los ciclos de expansión capitalista” que está formado bajo la premisa de la constante e ininterrumpida formación de la plusvalía y la tasa de ganancia. Entre estas dos categorizaciones de lo que significa una crisis hay abismos infranqueables. La primera visión, de corte instrumental, reduce la crisis a momentos de crecimiento interrumpido y sus indicadores están vinculados con variables macro y microeconómicas. De tal suerte que el comportamiento del Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, los índices de inflación, el comportamiento de la deuda externa, interna y externa, entre tantos indicadores, se convierten en la medición propia de los ciclos de crecimiento o interrupción del mismo. La segunda visión, de espectro crítico más amplio y conocido, supone que la crisis pertenece a una estructura de relaciones de producción, distribución y consumo que permiten el desarrollo y expansión de la tasa de ganancia. Los indicadores de la crisis

no se centran en un país, nación o región, sino en la dinámica de un sistema que se mueve por momentos de una totalidad histórica que incluye la participación del Estado, el Mercado y, por supuesto, la explotación a las masas trabajadoras. Sin embargo, pese a lo que se piense, las condiciones de precariedad de las clases explotadas no es indicador de crisis del capitalismo, sino su contrario, es decir, es señal de que el sistema goza de buena salud.

¿Qué define entonces una crisis? La respuesta no es sencilla pero en ambas concepciones se puede encontrar, de manera subyacente, una teoría del equilibrio. Ya sea la que proviene de la dinámica de los mercados que es capaz de autoregularse por los comportamientos de la oferta y la demanda —según la visión neoclásica de la economía política—; ya sea por la dinámica de los ciclos de explotación y expansión de la tasa de ganancia que se generan en el proceso mismo de producción —según el marxismo decimonónico—, lo cierto es que el hablar de crisis se deben tomar en cuenta las perturbaciones del equilibrio del sistema económico como externas e internas al propio sistema. La idea de que los factores que perturban el equilibrio del sistema son externas —como pueden ser las guerras, el aumento de los precios de los energéticos, el crecimiento de los flujos migratorios, entre tantos—, ha permitido justificar que los diversos *shocks* económicos parezcan no propios de los equilibrios económicos y aparezcan como errores accidentales o coyunturales. Existe, sin embargo, y sólo para revertir los intentos de legitimar el orden armónico y casi idílico de las relaciones de mercado, una propuesta desarrollada por Thomas Piketty que conjunta, en una teoría de la crisis económica contemporánea, dos factores claves: el primero, el de la evidencia de los roles de los grandes bancos y de las sociedades industriales, comerciales y de servicios en la construcción de la desigualdad social; segundo, los roles de los actores políticos quienes están llamados a diseñar reformas disciales y ajustes a los sistemas de pensiones y educativos para garantizar la racionalidad económica que debe proteger el Estado. De acuerdo a la visión de Piketty (2018) el capital financiero, hoy representado por los intereses de las grandes corporaciones (comerciales, financieras, industriales) transnacionales, debe de ser controlado por un Estado que debe fortalecerse en sus mecanismos de regulación del interés privado para dar pie, en un afán democratizador del mercado y del capital, a una revitalización del interés público.

El análisis de Piketty es sugerente en muchos sentidos. Primero, hace que la dimensión del interés público, representada por el Estado, aparezca en estrecha relación con la dimen-

sión del interés privado, representado por el capital financiero y el mercado. Segundo, establece que dicha relación se ha enfrentado con un estrechamiento histórico del interés público y con una expansión desordenada del interés privado. Por supuesto, esta colonización del interés privado sobre el público es, de orden político. Finalmente, establece que el resultado de estas relaciones es la desigualdad. Manuel Belo, da nombre a ese proceso de dominación del Mercado sobre el Estado y lo denomina «tiranía financiera»:

“The outcome of this financial tyranny is the reverential acceptance of the so-called market judgment that has been instrumental in changing the dialectical relations between global capital and the State. These relations follow a direction that undermined the power of labor and diminished the degree of the State’s freedom to both influence the economic sphere and to determine capital regulations, regardless of the democratic legitimization that those policies fostered in free elections” (Belo, 2004)

Como tendencia, ese empoderamiento del Mercado sobre el Estado ya había sido visualizado por Laidi Zaki (2000) quien expresó que, a nivel planetario, el poder de lo privado —empujado por las grandes transnacionales, regulado por los organismos translaterales y asumido por los órdenes políticos de los Estados— ha creado una nueva estrategia geopolítica cuya principal característica es, precisamente, la expansión del poder privado como una consecuencia lógica de las democracias contemporáneas. Laidi se pregunta lacónicamente si los agentes privados pueden, en efecto, generar procesos democráticos y conducir verdaderamente a la construcción de una democracia mundial.

México recolonizado

Muchos son los indicadores de que la economía en México se encuentra en medio de ese proceso que Manuel Belo denominara como «tiranía financiera» y, en medio también de un proceso por medio del cual las grandes decisiones públicas se organizan con base a los intereses de los grandes consorcios financieros. Sobre la primera, es sabido que desde la década de los ochentas, pasando los regímenes de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, la concepción administrativa en México empezó a construir el régimen legal para que el Estado empezara su lento proceso de adelgazamiento. Este proceso incluyó la venta de paraestatales que no fue otra cosa más que el inicio de un proceso largo de privatizaciones¹. Existe, empero, otro fenómeno que vino aparejado a ese abandono de su papel regulador: las transformaciones legales en el marco constitucional que fueron dirigidos, como en el caso del Artículo 27 Constitucional, a establecer las bases para que las corporaciones privadas pudieran incidir en el desarrollo de los sectores de la economía. Para el caso del ejemplo referido, la reforma al 27 Constitucional transformó la figura de la propiedad ejidal y la convirtió en rentable, enajenable, vendible o sujeto a asociación con el gran capital, tal como sucedió con el denominado proyecto Vaquerías en Monterrey, en la que, bajo

¹ En administración pública, cuando se habla de privatización, el objetivo es reestructurar el papel del Estado en la economía; es decir, el tamaño y las funciones del gobierno. Desde Miguel de la Madrid, y más aún con Salinas, el proyecto nacionalista entró en crisis, se tomó la decisión de replegar al Estado en su margen de maniobra de actor a simple regulador. Telmex, vendida a Carlos Slim, el remate y posterior eliminación del periódico El Nacional, y la Banca, son sólo un ejemplo de cómo ese proceso se echó a andar en el país.

el nuevo esquema legal, la empresa Gamesa México se pudo asociar con un grupo de ejidatarios productores de trigo (Reyes, 2008) Los resultados, por supuesto, no fueron los esperados aunque sí logró consolidar el marco jurídico de ese tipo de asociación.

El aire privatizador ha ido acompañado por una serie de reformas constitucionales que han dado el marco legal para las estrategias de orden macroeconómico en México. Se calculan 668 reformas a la Constitución de 1917 y sólo 422 se han realizado en el periodo que comprende 1988 a 2016, concentrándose 149 reformas en el periodo de Enrique Peña Nieto, mismas que dieron pie al paquete de las llamadas reformas estructurales en torno a educación, energéticos, telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica, laboral, fiscal y hacienda. En cada una de ellas, se puede apreciar cómo México ha ido adecuando su legislación a los intereses de las iniciativas privadas que han beneficiado a empresas como Televisa y TV Azteca y han permitido ir desmantelando Pemex al permitir que empresas como *Standard Oil*, *Texaco Oil*, *Shell Royal Dutch*, *British Petroleum Company*, *Mobil Oil*, *Gulf Oil Corporation*, además de *ARAMCO*, *Halliburton* y *Total Repsol*, entre otras, empiecen a sentar bases de inversión productiva y comercial.

La estrategia económica que suponían las reformas estructurales ha fracasado en lo que respecta a las metas de crecimiento estimadas por el gobierno federal. De acuerdo con el *Financial Times* y su rotativo *Medley Global Advisor*, las reformas no han logrado ofrecer ningún tipo de estabilidad económica en México y “la situación más evidente del deterioro económico, siguió el *Financial Times*, se hizo evidente con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) según las cuales la economía se contrajo 0.2% en el segundo trimestre, su primera baja en 12 trimestres, sobre una base anual donde México creció sólo 1.5%, muy lejos del 4% que prometían las reformas.” (Proceso, 2016)

Las reformas, sin embargo, han traído el empoderamiento de diversas empresas transnacionales que, como la minera, han logrado acaparar cerca del 73% de la explotación minera en el país. Se cuenta con información que dichas empresas son de origen canadiense y controlan el 70% de los proyectos de explotación, desarrollo y producción de metales preciosos como el oro y plata. Estas mineras, distribuidas en zonas estratégicas del país han estado involucradas en casos de contaminación de ríos en Sonora, Jalisco, Nuevo León y Veracruz (Greenpeace, 2014). Finalmente, en la lógica de los indicadores económicos nacionales, México es uno de los países de Améri-

ca Latina que posee una deuda externa de cuyo crecimiento ha sido catalogada como alarmante. De acuerdo con los datos aportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el endeudamiento en México “plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca de los límites de los criterios prudenciales que recomiendan los organismos internacionales” (Urrutia y garduño, 2017). De acuerdo con la nota publicada por el diario La Jornada, el endeudamiento público ha pasado de los 2 billones 51 mil millones de pesos en el año 2000, a 8 billones 633 mil millones de pesos en 2015. Este último dato representa ya el 45.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

La mala macroeconomía

Si hacemos caso al planteamiento de Thomas Piketty, el estrecho vínculo entre política y economía se hace visible en México pero en el sentido de la construcción de un discurso triunfal que, en la medida de los nuevos acontecimientos, se ven como signos de desesperanza, es decir, como signos de que el Estado no busca regular a favor del interés público y seguirá sujeto a las dinámicas frías del interés privado. Los datos macroeconómicos desmienten la versión oficial: la balanza comercial se encuentra en franco decrecimiento al pasar de un superávit de 18.4 millones de dólares (2012) a un déficit de 6,319 millones de dólares en 2015. Lo interesante resulta cuando se perfila que el déficit de la balanza comercial se concentra en los intercambios con Asia y con Europa. En el marco de las amenazas del actual presidente norteamericano de renegociar el Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLIC), ese déficit nos coloca en un verdadero riesgo comercial.

La inflación, por su lado, se encuentra también en tendencia negativa. En 2012 la inflación general en México fue de 3.57 por ciento, para 2013 subió a 3.97 por ciento, en 2014 fue de 4.08 por ciento y al mes de julio de 2015 la inflación anualizada es de 2.74 por ciento. En el último año, es decir en 2016, llegó hasta el 4.7 por ciento contra una expectativa de crecimiento de apenas el 1.2%.

El crecimiento de las tasas de interés sobre créditos bancarios se mantuvieron más o menos constantes hasta el año de 2015, sin embargo, en 2016 y lo que va de 2017, aumentaron de 3.30 por ciento (2015) a 4.75% en 2017 (Animal político, 2016).

El tipo de cambio es quien ha visibilizado mucho de los aspectos de la crisis ya que ha pasado dramáticamente del promedio de 13.51 pesos por dólar (2012) hasta 20.40 pesos en 2017. Este indicador alcanzó sus máximos históricos durante el mes de diciembre de 2016 y enero de 2017 al valuarse en 23.40 pesos por dólar. El comportamiento de este indicador, así como la decisión gubernamental de liberar el precio de las gasolinas en todo el país, ha generado una escalada en los precios de alimentos, transporte público y servicios, mismos que han desatado un crecimiento desmedido de la protesta social.

Lo imprudencial de los discursos políticos

La Auditoría Superior de la Federación definió este año que el endeudamiento externo en México había llegado ya a niveles de imprudencia financiera. ¿Qué posibilidades de desarrollo económico sostenido puede tener un país cuyo endeudamiento prácticamente iguala al 50% de su PIB? Las consecuencias, por supuesto, no son sólo de orden econó-

mico. Los efectos trascienden la dimensión financiera y se instalan en la órbita de la administración pública y los necesarios reajustes estructurales que se desprenden de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y que finalmente se traducen en medidas restrictivas: el recorte de gastos sociales –salud, educación, ciencia y cultura–, reducción del margen de salarios y transformación de los contratos laborales para eliminar el papel de los sindicatos, mayor recaudación hacendaria y un largo etcétera de medidas antipopulares que se adoptan. Los planes de Ajuste Estructural son, quizás, el mejor indicador de que un país se encuentra en una verdadera crisis económica y refleja su dependencia hacia las instituciones crediticias internacionales. En México, para el ejercicio 2017, el gobierno federal aplicó un recorte histórico de 239 mil 700 millones de pesos a su presupuesto corriente, equivalente al 1.2% del PIB y que afectará al desarrollo agrario, territorial y urbano, con 39.7% de menos recursos; a la Secretaría de Economía, con 35.5% menos; Secretaría de Turismo, por igual (Robles, 2016).

Si el endeudamiento público resulta ya un acto de imprudencia, la misma aseveración pudiera realizarse a nivel del discurso político. La constante negación de que México no se encuentra en crisis es, en sí misma, un indicador de que el gobierno federal se enfrenta a una crisis de credibilidad y confianza ciudadana, cada día más a la baja. De acuerdo con la Revista Forbes, “el componente que mide la situación económica actual de las familias frente a las que tenían hace 12 meses cedió 1.38 a tasa desestacionalizada, mientras que el de la situación económica que esperan dentro de un año respecto al presente disminuyó 0.72%. El indicador que mide la posibilidad de los miembros del hogar frente a lo de hace un año para efectuar compras de bienes durables cayó 3.25%. Finalmente, en cuanto a los indicadores sobre la situación económica del país, aquél que mide la percepción actual frente a la de hace un año, mostró un retroceso de 2.65%” (Forbes, 2015). En el mismo sentido, pero enfocado al desempeño público del actual presidente, la misma revista Forbes aseveró su caída en la caída de “las personas más poderosas del mundo” al sitio 60 cuando un año antes ocupaba el lugar 37. Si bien este dato es subjetivo, ofrece una idea de cómo las decisiones públicas en el orden económico repercute en otras dimensiones sociales. Por otro lado, el periódico Reforma reportó que “sólo 2 de cada 10 ciudadanos (23%) aprueban la forma en que Enrique Peña está haciendo su trabajo como presidente, y un 74% la desapruueba” (Animal político, 2016).

Conclusiones

El tema de la desigualdad es uno que lacera la vida de millones de personas en México y en el mundo. Thomas Piketty ha señalado que si hay algo que define a los ciclos económicos en el capitalismo, en superávit pero sobre todo en crisis, es la visibilización de la distribución de la riqueza como una de las cuestiones más controversiales y debatidas en la actualidad. Y tiene razón: la economía y su reflejo en los asuntos de administración pública, están tan estrechamente enlazados que la acción política estará en clara sincronía con las acciones económicas y ellas repercutirán en la construcción de la desigualdad social. Un Estado o un régimen político que busque cerrar la brecha de la desigualdad deberá repensar no sólo sus planes económicos, sino regular asertivamente a los diversos actores interesados más en el desarrollo de sus propios intereses que en el desarrollo social. En el caso de México, la circunstancia política que atraviesa con el fenómeno Donald Trump y el viraje hacia el neoproteccionismo, lo debería obligar a cambiar el rumbo de sus estrategias geoeconómicas y empezar a disminuir la dependencia económica y comercial que se tiene con Estados Unidos. Así mismo, debería abandonar el discurso triunfalista y reconocer que la crisis es una realidad que debería, en efecto, reconducir las acciones de regulación estatal a favor de la construcción de equilibrios económicos. Sin embargo, y pese a ese anhelo casi utópico de lo que se necesita hacer, la imprudencia política del discurso se hace cada vez más evidente al negar la crisis y sus indicadores, al confundirla con esa visión shumpeteriana que supone que detrás de cada crisis hay una oportunidad y que, en efecto, los mexicanos debemos saber identificar el fracaso de la política económica

como un reto. El problema subyacente se encuentra en la idea de que los 9.8 millones de nuevos pobres, propios de la administración pública del régimen actual, deberían ver su precariedad como un reto y como una oportunidad. El optimismo oficial choca con las cifras crecientes del desamparo.

Referencias

El Universal, 07 de febrero de 2008. México tendrá catarrillo por crisis en EU: Carsten. Consulta electrónica: archivo.eluniversal.com.mx/notas/480345.html

Proceso. 13 de febrero de 2017. "No hay crisis económica en el país, sólo una 'gran incertidumbre': Peña". Consulta electrónica: www.proceso.com.mx/474314/crisis-economica-en-pais-una-gran-incertidumbre-pena

Illich, I. 1984. "Neohabla y Unicuac" En: Alternativas II. México. Joaquín Mortiz,

Piketty, Thomas. La crisis del capital en el siglo XXI. Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco. Barcelona: Anagrama editores.

Manuel Belo Moreira, Agriculture and Food in the Globalization Age. Technical University of Lisbon, Portugal.

Laidi, Zaki. 2000. "El desafío de la hipermundialización". En revista Nexos, Abril, México. Consulta electrónica: http://www.nexos.com.mx/internos/abril2000/zaki_laidi.asp

Reyes Couturieri Teofilo 2008. El proyecto vaquerías. Experimento modernizador de la agricultura. México: Plaza y Valdez Editores.

Consultas electrónicas

Revista Proceso. Consulta electrónica 18 de febrero de 2017. <http://www.proceso.com.mx/452914/reformas-es>

tructurales-pena-nieto-una-gran-decepcion-financial-times

Greenpeace México. Consulta electrónica del 16 de febrero de 2017. Dirección <http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Septiembre/Rios-contaminados-ineficiencia-y-negligencia-en-Mexico/>

Periodico La Jornada. Méndez, Enrique; Urrutia, Alonso y Garduño, Roberto, 2017. Deuda pública al límite de la prudencia: ASF. La Jornada. <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/15/deuda-publica-de-mexico-plantea-riesgos-de-sostenibilidad-asf>

Animal Político. Consulta electrónica: <http://www.animalpolitico.com/2016/09/banco-mexico-tasa-interes/>

Robles de la Rosa, Leticia. "\$239.7 mil millones, el recorte para 2017; los estados no se apretarían el cinturón. Consulta electrónica en www.Excelsior.com.mx/2016/09/09/1115904

Consulta electrónica. www.forbes.com.mx/situacion-economica-golpea-confianza-del-consumidor-en-mexico/#gs.SyKpkfU

www.Animalpolitico.com/2016/08/baja-la-popularidad-del-presidente-pena-nieto/

PROYECTO SAPERE AUDE CIENCIA